

Grupo 4: Trabajo, trabajadores y estructura social
Coordinación: María Laura Elizalde - mareliza@mail.retina.ar
Pablo Dalle - pablodalle80@hotmail.com

Análisis de la conformación del campo político a partir de las expresiones de la cuestión social en la Argentina entre 2001 y 2007.

Cecilia Cross

Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-PIETTE, CONICET).
ccross@ceil-piette.gov.ar

Introducción

Desde mediados de los 90 el desempleo ha constituido la principal *cuestión social* en la Argentina. La categoría cuestión social fue acuñada en el siglo XIX para denominar aquellos factores asociados a la consolidación de la sociedad industrial que ponían en riesgo la cohesión social. En aquel contexto fue el pauperismo de las clases trabajadoras el punto en torno al cual se situaron los principales episodios de movilización, innovaciones institucionales decisivas, tales como la consolidación del derecho laboral o el voto universal masculino, y la conformación de actores políticos como los sindicatos y partidos obreros. Dichas transformaciones dieron lugar a lo que con Castel (1997) llamamos pasaje de la condición proletaria a la condición obrera. Este mismo autor, junto con Rosanvallon (1995), reintrodujo esta categoría en el análisis de las sociedades contemporáneas al definir al desempleo como la “nueva cuestión social”. Retomando críticamente este punto de partida, la pregunta que guiará esta trabajo es cuáles fueron los aspectos característicos que adquirió el desempleo como cuestión social en la Argentina en el período 1997-2007.

Siguiendo a Gautié (2002), consideramos que la categoría desempleo remite a una conceptualización del trabajo desarrollada en el marco del proceso histórico que dio lugar a la preponderancia de la relación salarial fordista como principio de regulación social. Dicha relación supuso la convergencia de aspectos jurídicos, económicos y sociales que establecieron al empleo como sustrato de integración social, movilización de factores de producción y distribución de la riqueza socialmente generada. En este marco el desempleo se constituyó como su par antagónico y, en este sentido, factor potencial de desintegración social y evidencia de una disfunción socio-económica que exigía la intervención estatal. De este modo, en un contexto que

tendía al pleno empleo masculino¹, las políticas sociales tendieron a pensar la familia, en el sentido restringido de familia nuclear conyugal (Segalen, 1986), como unidad de intervención frente al desempleo del “jefe/a de hogar”.

Como han sostenido diversos autores/as a lo largo del tiempo, en la Argentina el empleo asalariado también desempeñó un rol central como factor de integración social, de acceso a derechos políticos y sociales (Neffa y Matheu, 1984; Peña, 1986; Galín y Novick, 1990; Schvarzer, 1996, *et al*) y, en este sentido, la erosión del vínculo laboral, sea vía desempleo o precarización, ha sido pensada como factor de “destrucción del entramado social” (Martuccelli y Svampa, 1997; Battistini y Dinerstein, 1995; Schuster y Pereyra, 1999, *et al*). Como resultado de esta erosión habría sobrevenido la desestructuración de las identidades sociales (Svampa, 2000); la apatía política (Novaro, 1995; Vitullo, 2002); o la descolectivización (Svampa, 2005).

Si bien compartimos el punto de partida según el cual el desempleo en tanto cuestión social puso en crisis un modelo de integración, la investigación llevada a cabo nos permite situarlo como sustrato de luchas políticas que permitieron la conformación de un campo fuerzas en torno al desempleo.

En tal sentido, recuperamos los aportes de Manzano (2005: 24), quién a partir de su investigación sobre el Sector Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) observó que las relaciones entre “el movimiento de desocupados” y “el Estado argentino” no tenía la forma, de una ‘batalla irreconciliable de intereses antagónicos’, parafraseando a Thompson (1994) sino de “un campo de relaciones recíprocas donde las acciones de cada uno de los polos de la relación” podía ser comprendido “por su dependencia respecto del otro”. La centralidad de este campo de fuerzas en la disposición del campo político en el período analizado nos permite comprender a este último a partir de las diferentes expresiones de la cuestión social en la Argentina entre 1997 y 2007

En lo que sigue partiremos de analizar el modo en que se articularon precarización laboral, concentración del ingreso y desempleo en el período 1991-2001, a fin de poder situar la crisis de 2001. Luego pasaremos a analizar el proceso de conformación de un campo de fuerzas en torno al desempleo partiendo desde los primeros cortes de ruta hasta llegar a la “nacionalización del conflicto” en 2001. En tercer lugar daremos cuenta de los cambios en la política social a partir de 2003, para finalmente, examinar la relación entre precariedad, concentración del ingreso y

¹ Como advierte Gauté (ibidem), el desempleo ha sido pensado en función de la conformación de la llamada población económicamente activa. Así para ser considerado parte de la PEA y por tanto desocupado resultaba necesario acreditar la búsqueda activa de de empleo. Las estrategias de las mujeres para emplearse no necesariamente coincidían con este modelo por lo que frecuentemente se las ha considerado *inactivas*.

desempleo luego de 2003. De este modo podremos observar un desplazamiento en la definición de la cuestión social que partiendo del desempleo como problema social asociada a la condición de *trabajador/a desocupado/a* dio lugar a una discriminación de la población desempleada, bajo la atribución de la condición de “empleabilidad”, para distinguir entre quienes tendrían la capacidad de insertarse en el mercado de trabajo y quienes serían objeto de asistencia.

Este trabajo es resultado de una investigación cualitativa sobre procesos de implementación local de políticas sociales dirigidas desocupados/as pobres comenzada en 2001, la cual tiene continuidad a la fecha en el marco del proyecto PICT 1721/08. El trabajo de investigación ha constado del análisis de registros de observación de actividades cotidianas, entrevistas en profundidad, documentos y estadísticas oficiales –particularmente la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)- así como fuentes secundarias, las cuáles han sido trianguladas para la elaboración de categorías y proposiciones teóricas con el fin de producir teoría basada en los datos (Glaser y Strauss, 1967).

1. Desempleo y precarización en la zona metropolitana de Buenos Aires

Como hemos señalado, comenzaremos por analizar la articulación entre desempleo, precarización laboral y concentración del ingreso en el período 1991 y 2001.

A los fines de este trabajo, analizaremos el desempleo tomando como referencia la tasa del INDEC, la cual mide la incidencia de la población desocupada en la población económicamente activa (PEA). En este sentido, la tasa de desempleo resulta complementaria a la tasa de ocupación. La discusión en torno al concepto de precariedad es extensa. A los fines de este artículo consideramos como trabajadores/as “precarios/as” a quienes teniendo un empleo continúan buscándolo activamente. Como variable proxy consideraremos a quienes revisten en la categoría de “sub ocupados demandantes”. En relación con la concentración del ingreso analizaremos comparativamente la participación del primer y del último decil de población en el total.

El período analizado abarca la vigencia de la política económica basada en la paridad entre el peso y el dólar y la puesta en marcha de las llamadas “reformas estructurales” del Estado (Rapoport, 2000) consistentes, a grandes rasgos, en la privatización de empresas públicas (Thwaites Rey, 2001; Aspiazu, 2002) transferencia de los costos asociados al sostenimiento de la

salud y la educación a las provincias (Vilas, 2003), reducción del empleo estatal formalizado (Abal Medina y Nejamkis, 2002; Diana Menéndez, 2007), focalización de la política social (Vilas, 2003, Álvarez, 2000) y estímulo de las modalidades de contratación precaria en los sectores público y privado (Battistini y Dinerstein, 1995; Beccaria, 2002).

Para dar cuenta los efectos de estas “reformas” en el mercado de trabajo analizaremos, en primer lugar, las tasas de actividad², empleo³, subempleo⁴ y desempleo⁵. Tomaremos como referencia el año 1986, como momento previo a la crisis hiperinflacionaria y consideraremos las tasas de 1990 para poder analizar la situación de estos indicadores en el año inmediato anterior a la implementación de la ley de convertibilidad tomando como referencia el año, según consta en el cuadro 1:

Cuadro 1: Tasa de actividad, empleo, desocupación para GBA desde 1986 a 2001 (onda octubre EPH-INDEC)

	Actividad	Empleo	Desempleo	Subocupacion
1986	40,0	38,2	4,5	6,1
1990	40,3	37,9	6,0	8,1
1991	40,8	38,6	5,3	7,0
1992	41,7	38,9	6,7	7,3
1993	43,3	39,1	9,6	9,1
1994	43,1	37,4	13,1	10,1
1995	44,2	36,5	17,4	12,6
1996	44,9	36,5	18,8	13,8
1997	45,1	38,7	14,3	13,0
1998	45,4	39,4	14,1	14,0
1999	46,0	39,4	15,6	15,2
2000	45,1	38,5	16,0	14,5
2001	44,4	35,9	17,0	16,5

Considerando la tasa de desempleo, es posible observar que en los primeros años de vigencia de la convertibilidad (1991-1992) esta tasa registró una caída respecto al nivel alcanzado en 1990, en vigencia de la crisis hiperinflacionaria. No obstante, a partir de 1993 se observa un incremento de esta tasa que podría ser explicado casi exclusivamente a partir de la ampliación de la oferta de trabajo, es decir del aumento en la tasa de actividad.

² El INDEC calcula la tasa de actividad como producto de la división de la población económicamente activa (PEA) sobre la población total general. Se considera como “activas” a aquellas personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente (Fuente: INDEC).

³ La tasa de empleo se calcula a partir de la relación entre las personas ocupadas y la PEA. Se consideran “ocupados/as” a quienes en la semana de referencia han trabajado como mínimo una hora en forma remunerada, o 15 horas sin remuneración (en una actividad económica) (Fuente: INDEC).

⁴ Esta categorización corresponde a la población ocupada, que sin embargo trabaja menos de 35 horas semanales por cuestiones ajenas a su voluntad (subocupación visible). (Fuente: INDEC)

⁵ La tasa de desempleo mide la relación entre los desocupados y la PEA. Están desocupados quienes no teniendo trabajo, lo buscan activamente. Es decir que es la población complementaria de la población ocupada, respecto a la población económicamente activa. (Fuente: INDEC)

En efecto, observando este cuadro 1 es posible ver que a lo largo del período analizado la tasa de actividad tuvo un incremento neto de más de cuatro puntos, incremento que se consolidó a partir de 1993.

Este incremento fue atribuido al “efecto trabajador adicional” (Beccaria, 2002; Neffa, 2003). Según esta interpretación entre 1991 y 1993 el empleo estuvo signado por dos fuerzas de sentido opuesto: por un lado la expansión económica habría favorecido la creación de puestos de trabajo en una economía que había atravesado una fuerte etapa de estancamiento. Por otro, el aumento en la productividad (sobre todo en el sector servicios) y la reestructuración estatal tendieron a reducir la elasticidad de la relación empleo-producto. Considerando este escenario, coincidieron en que la precarización y/o el desempleo que afectó a los/as jefes de hogar habría llevado a que integrantes de los hogares hasta entonces inactivos/as comenzaran a buscar empleo para compensar la pérdida o reducción de los ingresos.

En 1994 la tasa de desempleo alcanzó los dos dígitos y esta suba puede ser explicada por una caída en la tasa de empleo. El simultáneo aumento del subempleo permite suponer que en este marco no sólo se registró una destrucción de puestos de trabajo, sino que aquellos que fueron creados tuvieron peor calidad. Entre ese año 1994 y 1996 volvieron a incrementarse el desempleo en 5 puntos básicos y el subempleo en tres, a pesar de que el empleo apenas cayó un punto. Esto pone de manifiesto la constante precarización del empleo –considerando la extensión de la jornada de trabajo y la búsqueda de empleo de personas que trabajan menos horas que las que desean- junto con la incapacidad del mercado de trabajo de absorber una oferta creciente.

En 1997 y 1998 las tasas de actividad, empleo y subempleo sufrieron un alza siendo acompañadas por una leve caída en el desempleo, lo cual puede ser comprendido en el marco de la recuperación económica “pos tequila⁶”. A partir de 1997 la tasa de desempleo y subocupación fueron similares, lo cual modificó la situación vigente en el período 1986-1993, lapso durante el cual la subocupación había sido un 50% más elevada que el desempleo. Finalmente, a partir del año 1999 la tasa de desempleo experimentó un alza significativa y continuó incrementándose hasta el final del período considerado, siendo levemente superior a la tasa de subempleo.

⁶ Frente a la eventualidad de declararse en cesación de pagos, el gobierno mexicano del presidente Zedillo devaluó la moneda nacional. Esto provocó un aumento de las tasas de interés aplicadas a los países emergentes provocando “corridos” financieros a nivel mundial, particularmente en los países latinoamericanos que, como Argentina, habían instrumentado las medidas macro económicas propuestas por el Fondo Monetario Internacional y eran fuertemente dependientes del financiamiento externo. Esto dio lugar a una crisis económica animada por la posibilidad de que nuestro país “saliera” del régimen de convertibilidad. A partir de fines de 1996 los indicadores macroeconómicos se recuperaron, hasta que en 1998 comenzó un proceso recesivo que no se revirtió hasta 2003 (Damill y otros/as, 2003)

En el mismo cuadro se puede observar que, por su parte, la tasa de empleo se mantuvo casi constante desde el inicio del período, aún comparándola con el año de referencia (1986). Si bien cayó fuertemente en los años 1995 y 1996 después de la crisis a la que dio lugar el "efecto tequila" se recuperó, desplomándose sólo en el año 2001, cerca del fin de la convertibilidad.

De esta forma, es posible pensar que a partir de 1996 las tasas de desempleo y subempleo comprendieron a una población compuesta por personas que *alternativamente revistaron como desocupadas o como subocupadas*. Sin embargo, a fin de aportar más elementos al análisis es útil considerar la evolución de la subocupación horaria, en función de una subcategorización: subocupación horaria demandante⁷ y subocupación horaria no demandante⁸. Lo haremos en el período 1993-2001, debido a que no existen datos disponibles con anterioridad a esa fecha.

Cuadro 2: Subocupación horaria total, subocupación horaria demandante y no demandante para GBA período 1993-2001

Año	Subocupacion demandante	Subocupacion no demandante
1993	3,8	5,3
1994	5,4	4,7
1995	7,8	4,8
1996	8,5	5,3
1997	7,8	5,2
1998	8,8	5,2
1999	9,8	5,4
2000	9,2	5,3
2001	10,8	5,7

Como hemos visto en el cuadro 1, en el período 1993-2001 la subocupación se triplicó, sin embargo en el mismo lapso de tiempo la subocupación no demandante se mantuvo constante. Esto refuerza nuestra interpretación respecto a que *la subocupación constituyó una actividad de refugio para aquellos/as que se encontraban buscando un empleo pleno, y necesitaban financiar esta búsqueda*. En este sentido, el incremento en la tasa de subempleo demandante nos da la pauta del proceso de precarización y su impacto en el tipo de empleo generado y en el nivel de ingresos ofrecidos. Queda pendiente, entonces, establecer *fehacientemente la relación entre desempleo y precarización con la caída del ingreso* a fin de poder establecer que el desempleo abierto en el período analizado está relacionado con un "efecto de trabajador/a adicional" que se

⁷ Corresponde a la población ocupada, que sin embargo trabaja menos de 35 horas semanales por cuestiones ajenas a su voluntad (subocupación visible). Adicionalmente, se encuentran buscando trabajo en forma activa. Es decir que se encuentran en la frontera entre la población ocupada y la desocupada (Fuente: INDEC)

⁸ Se refiere a la población subocupada (es decir que trabaja menos de 35 horas semanales) pero que no se encuentra buscando empleo en forma activa. De todas formas, no debe perderse de vista que la población aquí incluida estaría dispuesta a trabajar más horas. En este caso es más difícil de sostener su pertenencia a la categoría de "desocupados encubiertos" por el hecho de que no se encuentran buscando más empleo. De todas formas, su voluntad manifiesta de trabajar más horas es un indicador significativo (Fuente: INDEC)

extendió mucho más allá de 1993. Para eso, resulta necesario analizar la distribución del ingreso⁹ en la economía lo cual haremos a partir de contraponer la participación del primer y del último decil de población en el cuadro 3.

Cuadro 3: Ingreso del diez por ciento más rico de la población versus ingreso del diez por ciento más pobre de la población, en el período 1990-2001

Año	Porcentaje del ingreso del primer decil de población	Porcentaje del ingreso del último decil de población	Relacion ultimo decil sobre primer decil
1986	2.5	34.6	13.8
1990	2.3	35.3	15.3
1991	2.4	36.4	15.1
1992	2.2	34.5	15.7
1993	1.9	34.8	18.3
1994	1.9	34.8	18.3
1995	1.7	37.3	22.0
1996	1.6	36.3	22.7
1997	1.6	35.3	22.1
1998	1.5	36.9	24.6
1999	1.5	36.1	24.1
2000	1.4	36.6	26.1
2001	1.3	37.3	28.7

En el cuadro 3 se pone de relevancia el hecho de que la brecha entre la población más pobre y la más rica se duplicó en el período analizado. Este proceso comenzó antes del inicio del “modelo” y se profundizó a partir de 1993.

Observando el decil inferior vemos que este sector recibió una porción cada vez más pequeña del ingreso, habiéndose acentuado esta tendencia desde 1995, de modo que en 2001 su participación en el ingreso era menor a la mitad de la alcanzada en 1986.

Asimismo, es posible observar que, aún en etapas en que se registró una recuperación del nivel de empleo, por ejemplo en 1997-1998, la tendencia a la concentración del ingreso no fue alterada. En esos años, en lo que había disminuido la subocupación horaria demandante de empleo, se redujo la participación en el ingreso del sector más pobre, lo cual reafirma la hipótesis acerca de la escasa calidad de los empleos generados en el período, ya no sólo en términos de duración de la jornada, sino también del salario.

⁹ Esta variable capta los ingresos de la población, provenientes de cualquier actividad con valor económico en el mercado. (Fuente: INDEC).

En cambio, la participación en el ingreso del decíl superior aumentó en forma permanente. A partir de 1995 el incremento se aceleró, más que la caída del decíl inferior: Es decir que se registró en desmedro de otros sectores.

Este análisis pone de manifiesto que una destrucción constante de empleos formales a favor de estas modalidades precarizadas, lo cual se reafirma al observar que la baja en la tasa de desempleo de 1997 y 1998 no se reflejó en un aumento del empleo, sino en un incremento de la subocupación demandante. El estudio de estos datos permite dar cuenta de una disminución en la calidad de los empleos ofrecidos a los sectores de menores recursos, tanto en términos de su estabilidad como de su extensión horaria y remuneración¹⁰.

Asimismo, el crecimiento sostenido en la tasa de actividad da cuenta de que un número creciente de personas que revistaban como *inactivas* buscó empleo, probablemente para complementar la reducción experimentada en el ingreso familiar a partir de la precarización del trabajo.

De esta forma, la articulación entre desempleo, precarización y pobreza que reflejan estos indicadores da cuenta de las dificultades de los sectores más pobres para obtener y mantener un empleo de tiempo completo y con una remuneración acorde a las necesidades de su grupo familiar. Este fue el marco en el cual la “lucha” por el “trabajo genuino” alcanzó los niveles más altos en la zona metropolitana de Buenos Aires, proceso del que nos ocuparemos a continuación.

2. De los “primeros piquetes” a la “nacionalización del conflicto” (1997-2002).

Los años ‘90 fueron escenario de un proceso de movilización por el empleo que parecía por fuera de las expectativas contemporáneas. Paradójicamente, mientras en los ámbitos académicos se hablaba de crisis de las identidades sociales, descolectivización o apatía política, se registraron variados intentos de coordinar diversas formas de organización y movilización con el objetivo declarado de “resistir y combatir el neoliberalismo” (Farinetti, 1999).

En este marco tuvo lugar la movilización de los/as “trabajadores/as desocupados/as” en el interior del país, que junto a diversas organizaciones locales, comenzaron a “cortar” las rutas para denunciar los efectos de las privatizaciones sobre pueblos enteros (Andujar, 2005). Este fue el escenario en el que se pusieron en marcha programas sociales específicamente dirigidos a los/as desocupados/as pobres como el “Trabajar” (Farinetti, 1999; Zibechi, 2003, Auyero, 2002). Estos programas pueden encuadrarse en el esquema de transformaciones de la política social

¹⁰ Como veremos más adelante, esta descripción puede corresponder a dos tipos de actividades, las “changas” o la participación en programas de empleo transitorio o “planes”

denominadas de *workfare* (Barbier y Gautié, 1998), es decir de asistencia focalizada y temporalmente acotada, implementadas bajo la exigencia de realizar una contrapartida en actividades laborales por parte de sus beneficiarios/as. Las políticas de *workfare*, que en el campo político argentino se conocieron como “planes”, quedaron de este modo asociadas al “piquete” como modo de demandar y al “trabajo genuino” como demanda. En este marco, se conformaron la FTV bajo el liderazgo de Luis D’Elia y la CCC bajo el de Juan Carlos Alderete. Una de las paradojas que planteó esta situación fue que los “planes” no habían sido “ofrecidos” por parte del gobierno. Lo que se “ofrecía” a las organizaciones territoriales era sobre todo comida y ropa (Svampa y Pereyra, 2003). Entonces, “aceptar los planes” significaba asumir públicamente al desempleo como “eje de lucha”, adoptando las prácticas de movilización asociadas a esta problemática –los “piquetes”- e integrando los programas, como el Trabajar, a la negociación (Cross, 2007).

En 1998, un grupo de dirigentes nucleado en la “Red de barrios de la Matanza”, bajo el liderazgo de Luis D’Elia, decidió cortar la Ruta 3. Esta movilización constituyó un “bautismo” para las organizaciones territoriales que habían decidido dar la “lucha por el empleo” porque permitió que esta decisión se expresara públicamente. Sin embargo, cuando estaban dispuestos a comenzar con el piquete fueron advertidos de que la Gendarmería Nacional había apostado cientos de efectivos para evitar el corte.

Luego de una “asamblea rápida” se decidió dejar de lado el “piquete” y proceder a la “toma” de un templo católico, el Sagrado Corazón. Este templo estaba situado en la misma ruta y constituía un espacio ampliamente conocido para muchos/as de los/as líderes de la Red, quienes habían formado parte de la Comunidades Eclesiales de Base (CEB) impulsadas desde esa parroquia. Los/as manifestantes permanecieron en el templo, bajo el amparo del sacerdote y la diócesis, durante 24 días al cabo de los cuales les fueron otorgados alimentos y ropas con los que sostener sus “comedores comunitarios”. El éxito fue moderado considerando las expectativas iniciales.

Este intento fallido coincidió con otro llevado a cabo el mismo día por un grupo liderado por Juan Carlos Alderete y otros dirigentes del Partido Comunista Revolucionario (PCR), ellos también asociados a procesos de “toma de tierras”. Este intento concluyó con una feroz represión, pero, a la larga permitió la articulación entre ambos grupos que hasta entonces habían permanecido “indiferentes” por sus “ideologías”.

Según nos contó un protagonista de estas jornadas, luego de este intento se “empezó a manyar la cosa”. La experiencia de los “piquetes” en el interior del país habían mostrado “el ejemplo” a

seguir como nos decía otro dirigente. Los programas sociales habían sido diseñados como modo de contención del conflicto, como prenda de negociación y en este sentido *la movilización formaba parte de la gestión de la política social*. La idea de “medida de fuerza” tomaba todo su sentido: En el piquete gobierno y manifestantes medían su fuerza.

La de éstos/as últimos era evidenciada a partir de su capacidad de forzar la negociación con las autoridades gubernamentales, para lo cual la “masividad” alcanzada y la presencia de “toda la familia” resultaba un aspecto clave en tanto aumentaba el “costo político” de reprimir a los/as manifestantes. Del mismo modo la observación de ciertas pautas, como evitar la ingesta de alcohol, las acciones que pudieran irritar o molestar a los/as vecinos/as, las peleas entre personas movilizadas aportaban en el mismo sentido. El nivel de organización alcanzado también permitía dar a la consigna de sostener la medida “por tiempo indeterminado” su verosimilitud. En este marco, los/as “líderes” de la FTV y la CCC Sector Desocupados, se decidieron a encarar acciones conjuntas, tomando en cuenta estos diversos aspectos

Esto nuevo intento por llevar adelante un “corte” de la Ruta 3 tuvo lugar el 30 de octubre de 2000 y fue cuidadosamente planificado entre los/as dirigentes territoriales vinculados a estas organizaciones. Luego de seis días el “corte” se “levantó” con la firma de un “acuerdo” en con el MTESS por el que sus autoridades se comprometieron a otorgar “planes” y “mercadería”. Su incumplimiento llevó a la realización de un segundo “corte”. Éste tuvo lugar entre los días 6 y 23 de mayo de 2001.

Esta medida congregó a unos/as 3000 manifestantes, sobre todo mujeres, que permanecieron en el Km 22 de la Ruta 3 –a la altura de Isidro Casanova- durante 18 días. Las principales consignas eran el cumplimiento del acuerdo establecido con las autoridades en noviembre del año anterior y la liberación de Emilio Alí, un dirigente marplatense vinculado a la FTV.

Los testimonios relevados coincidieron en que una particularidad de este “corte” fue el establecimiento de ciertas prácticas que organizaron la cotidianeidad en el “piquete”. Una vez más, se montaron carpas y se distribuyeron alimentos para organizar “ollas populares” por barrio. Hubo un servicio sanitario sostenido por voluntarios/as y actividades recreativas para los/as pequeños/as. Los/as niños/as en edad escolar fueron cada mañana a la escuela desde la ruta y realizaron allí sus “tareas” ayudados/as por los/as manifestantes. Se realizaron asambleas a diario en las que se informó acerca del avance de las negociaciones y se tomaron decisiones. La “seguridad” también se organizó por barrios y su función no fue sólo organizarse frente a un posible intento de represión, sino también controlar que no se produjeran episodios de violencia

o robo entre los/as manifestantes. Al cabo de 18 días el corte “se levantó” al establecerse un cronograma de cumplimiento del acuerdo alcanzado en 2000, con lo cual estas organizaciones obtuvieron los “primeros planes” y se aseguraron la “asignación de mercadería” para sostener sus actividades comunitarias.

En este marco se consolidó lo que con Virginia Manzano (2005) llamamos la “forma piquete” que caracterizó esta etapa de la “lucha por el trabajo genuino”. El piquete, en tanto forma social, “construyó” al Estado y a las organizaciones de desocupados en un mismo campo de fuerzas. De este modo el piquete se constituye al mismo tiempo como acto ritualizado, experiencia y modo de regular la relación entre organizaciones y estado¹¹.

Con estos primeros “logros” la presión sobre los/as dirigentes territoriales lejos de distenderse, se incrementó. Las “necesidades” de “la gente de los barrios” eran inagotables, pero como habían experimentado, para poder “arrancar esos recursos al estado” había que estar “preparados para luchar”. Debido a la importancia que adquiriría en este contexto lograr la “masividad”, se ampliaron las articulaciones con otras organizaciones y expresiones políticas, entre las cuales se destacaban quienes desde la zona sur del conurbano, particularmente en Florencio Varela y San Francisco Solano habían hecho intentos similares de situarse públicamente en la “lucha contra el desempleo”.

Estos procesos de movilización territorial confluyeron con otros protagonizados por dirigentes sindicales y partidarios que vieron en este proceso la posibilidad de plantear una alternativa a la hegemonía del “neoliberalismo” bajo el imperativo de “nacionalizar el conflicto”. Este imperativo era compartido por los/as líderes territoriales quienes se veían “desbordados/as”. La confluencia de intereses dio lugar a la conformación de espacios “multisectoriales” entre los que se destacaron dos: la “Asamblea Nacional de Organizaciones Territoriales, Sociales y de Desocupados” y el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO).

El primer encuentro de la Asamblea, también llamado “Congreso Piquetero” tuvo lugar el 24 de Julio de 2001 en el partido de La Matanza en el galpón de la Parroquia de El Sagrado Corazón. De esta primera Asamblea, participaron Víctor De Gennaro, secretario general de la CTA y Hugo Moyano que encabezaba lo que por entonces se denominaba la “CGT disidente”. En este marco se asumió un “plan de lucha” bajo el slogan de “desobediencia civil” que dio lugar a cortes de ruta en 50 ciudades de todo el país, dando lugar a la “nacionalización del conflicto”. En virtud de estos hechos, este fue el momento de mayor fuerza de los movimientos piqueteros en

¹¹ La autora parte del concepto de “forma social” desarrollado por Simmel y recuperado recientemente por Ligya Sigaud para comprender la relación entre el Estado Brasileño y los movimientos de ocupación de tierras

general, y de la FTV -liderada por el sector matancero- y la CCC Sector Desocupados en particular. Una convocatoria propia atraía a dirigentes sindicales y políticos/as opositores/as. Durante la realización del “Segunda Asamblea Nacional de Organizaciones Territoriales, Sociales y de Desocupados”, llevada a cabo en San Justo (Partido de La Matanza) el 4 de septiembre de 2001, Luis D’Elia y Juan Carlos Alderete fueron elegidos como Secretarios Generales de la Asamblea. Sin embargo, la resistencia de ciertos dirigentes vinculados a partidos de izquierda de tejer alianzas con la CGT disidente dieron lugar a “un quiebre de la Asamblea” que se fue profundizando a lo largo de 2002.

En relación con el FRENAPO, este espacio liderado por la CTA marcó el encuentro entre organizaciones piqueteras, de defensa de los derechos humanos, partidos políticos, sindicatos, vinculadas a la Iglesia Católica, etc. Su convocatoria se estructuraba en torno a la demanda por “un seguro de empleo y formación” de \$380¹², más \$60 por “cada menor a cargo” para “todos los jefes de hogar desocupados” y de \$150 para “cada persona mayor de 65 años sin jubilación”. Con el fin de refrendar públicamente esta propuesta se convocó a un plebiscito que tuvo lugar entre el 14 y el 17 de diciembre de 2001. La consulta se realizó en mesas ubicadas en la vía pública, y en las sedes de las instituciones convocantes. Pese a la falta de infraestructura, de publicidad y de recursos económicos la propuesta fue avalada por aproximadamente tres millones de votos, lo que superó ampliamente las expectativas de los/as organizadores/as. Sin embargo, los resultados de la consulta popular del FRENAPO no ocuparon un lugar central en los principales matutinos del día 18 de diciembre de 2001. La “ola de saqueos” iniciada en Rosario, Mendoza, Entre Ríos, la Capital y el Gran Buenos Aires, se había convertido en el tema del día. Se había comenzado a expresar la crisis más importante desde la restauración democrática (Roig, 2007¹³).

El 1º de enero de 2002 el senador Eduardo Duhalde asumió en forma provisional la primera magistratura. Inmediatamente decretó la “emergencia económica, alimentaria y sanitaria” en el marco de la cual se instrumentó el “Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”, mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) N° 565/02, el cual fue gestionado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTESS). Este programa pretendió tener

¹² En un momento en que el salario mínimo vital y móvil estaba en \$250 (Fuente Ministerio de Economía de la Nación (MECON)) y la línea de pobreza estaba en \$151 para una familia constituida por dos adultos, un adolescente y una niña (Fuente INDEC).

¹³ La crisis de diciembre de 2001 señaló el principio del fin de la convertibilidad. La relación entre la finalización de la paridad cambiaria y la magnitud de la crisis concomitante, que no puede ser adjetivada ni como meramente política, económica o cultural sólo puede ser comprendida al considerar que la moneda estable se constituyó en institución organizadora de lo social, en sentido maussiano. a lo largo de la década en que conservó su vigencia. (Roig, 2007)

alcance “universal” con la intención de revisar la lógica de “focalización” que había caracterizado a las políticas sociales de los '90, aunque siguió funcionando bajo el esquema de *workfare*. Sus potenciales beneficiarios/as fueron, en primera instancia, *todos/as* los/as jefes y jefas de hogar con hijos/as menores o discapacitados/as a su cargo o con cohabitante en estado de gravidez (Fuente: SIEMPRO).

En su diseño se recuperaron en parte las demandas planteadas a través de los “Congresos Piqueteros” y la “consulta popular” del FRENAPO, en lo referido a brindar asistencia en forma “universal” a los/as “jefes/as de hogar de desocupados/as”. Pero a su vez, se pretendió debilitar a quienes habían impulsado este Frente, buscando restituir la relación Estado-beneficiarios/as sin intermediación de las organizaciones territoriales ni de los movimientos piqueteros.

En todo caso, el monto del beneficio, que alcanzaba los 150 Lecop,¹⁴ estaba muy por debajo de lo exigido por el FRENAPO y la “universalidad” nunca fue alcanzada. El programa llegó a tener 1.987.875 beneficiarios/as (CELS, 2003a) en abril de 2003 y se estima que el 8% de los “planes” fueron gestionados por organizaciones “piqueteras”, lo cual constituyó un volumen de recursos realmente significativo (Cross, 2008).

Sin embargo, el JyJHD no era el único programa gestionado en la etapa por estas organizaciones. Éstas también ejercieron un importante rol en la administración de otros que fueron implementados para enfrentar la “emergencia”. En este punto se destacaron el Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR)¹⁵, PROHUERTA¹⁶ y el Programa de Emergencia Alimentaria (PEA)¹⁷. No obstante, los líderes piqueteros siguieron sosteniendo que su lucha no era por subsidios, sino por “trabajo genuino”, como puede verse en esta crónica:

Uno de los puntos más importantes fue la discusión acerca de la necesidad de salir del asistencialismo, que genera mayor dependencia y además es la madre del clientelismo político, para poder generar emprendimientos productivos permanentes que generen empleo para los desocupados. Por eso necesitamos el impulso para todos los proyectos de autogestión, cooperativismo y empresas sociales, que servirían para aprovechar la enorme

¹⁴ Lecop era la forma de llamar a las “Letras de cancelación de obligaciones provinciales” que fueron creadas por el Decreto PEN 1004/01 para afrontar las deudas del Estado nacional con las provincias en un contexto de fuerte recesión. Circulaban como moneda, al igual que el peso convertible. En 2002 tuvo lugar una segunda emisión de estos bonos (decreto PEN 409/02) que se utilizaron para pagar salarios a empleados/as estatales y también los subsidios como el JyJHD. Entre 2001 y 2002 se emitieron Lecop por 3.225 millones de pesos (Fuente: Mecon).

Bonos Provinciales de Emergencia

¹⁵ El FOPAR fue destinado en el año 2002 a atender las necesidades alimentarias de la población en situación de pobreza a través del financiamiento de comedores comunitarios. (Fuente: SIEMPRO).

¹⁶ El programa PROHUERTA se proponía como objetivo mejorar la condición alimentaria de la población rural y urbana en situación de pobreza a través de la autoproducción de alimentos en pequeña escala (huertas y granjas familiares, escolares, comunitarias o institucionales). (Fuente: SIEMPRO.)

¹⁷ El PEA se proponía distribuir recursos alimentarios directos o monetarios a familias en situación de pobreza, con prioridad aquellas integradas por menores de 18 años, mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años sin jubilación o pensión y personas discapacitadas. (Fuente: SIEMPRO).

capacidad industrial que tiene nuestro país. (Luis D'Elia en "La FTV y la CCC se reunieron con Duhalde", página web de la FTV- CTA, 13 de febrero de 2003)

En esta declaración se observa la adhesión del máximo dirigente de la FTV a la idea de que la "economía social" constituía una alternativa frente al "asistencialismo" en tanto "madre del clientelismo político". El tipo de economía social al que apostaban incluía una relación salarial en empresas manufactureras. Este es la connotación que adquirió la categoría de "trabajo genuino" en este marco.

No obstante, en la cotidianeidad de las organizaciones la mayor parte del tiempo y el esfuerzo estaba concentrado en la gestión de los programas sociales. Como hemos señalado en otros trabajos (Cross, 2006), la implementación de estos programas fue sostenida por densas redes comunitarias y organizativas constituidas desde tiempo antes, las cuales fueron reforzadas para lidiar con las obligaciones administrativas que impuso la gestión de estas diversas políticas. Coincidimos en este sentido con Manzano (2003:12) quien sostuvo que en este marco "las asociaciones comunitarias" funcionaron "como agentes" en la gestión local de la política social "en un intento por aportar soluciones no económicas y menos costosas a las intervenciones estatales" frente al desempleo y la pobreza. De este modo, miradas desde su implementación local las políticas sociales comenzaron a moldear la cotidianeidad de las familias de los barrios. Así nos fue contado:

Principalmente cuando yo me acerqué fue por la desesperación. Mi marido, que había trabajado toda la vida, no conseguía nada. Changueaba un poco, juntaba cartón, pero no alcanzaba. Los pibes míos más grandes empezaron a salir a pedir a Capital, que no es vergüenza no, pero tuvieron que salir y eso fue un mazazo en la cabeza para él [se refiere a su marido]. Creo que fue peor cuando yo agarré a las dos más chicas mías y le dije "me voy al comedor aunque sea a que me den leche"... Se quería morir de que nos vieran así en el barrio. Dios me iluminó que fui ese día que se iban a marchar. Ahí me encantó, me pude sacar la bronca, me sentí acompañada, me gustó, no? Y empecé a venir todos los días y me fui haciendo. Cuando salieron los Jefes me dieron un plan, yo ayudo a clasificar la mercadería que es la tarea que tengo por el plan [contraprestación] y con las changas de él, la ropa que me van tirando en el ropero que tenemos acá... Digamos que estamos mejor, al menos los grandes míos pudieron volver al colegio y las chiquitas están cuidadas mientras yo hago mi trabajo... Bueno, yo le digo mi trabajo, pero bueno, es un trabajo, aunque lo que nosotras siempre queremos es trabajo genuino para que nuestros hijos no tengan que pasar lo que pasamos... (Blanca¹⁸, referente, Barrio José Luis Cabezas, La Matanza, 2002)

¹⁸ Los nombres atribuidos a las personas entrevistadas son ficticios para conservar el compromiso de confidencialidad asumido.

El relato de Blanca, que tuvo lugar en 2002, es similar a muchos otros y nos permite observar tres cuestiones centrales. En primer lugar, la vinculación con las organizaciones piqueteras es presentada a partir de las carencias padecidas por la falta de empleo de quien hasta entonces había cumplido el rol de jefe del hogar. Dado que la condición de pobreza y estado de emergencia era parte de la formulación de la política, este dispositivo discursivo no puede pensarse en forma aislada de esta configuración.

En segundo lugar da cuenta de estrategias familiares que combinaron diversos modos de acceso a los recursos frente a la crisis. Blanca enumeró algunos de ellos estableciendo jerarquías al mostrar que cada actividad se encuentra más cercana a la “desesperación” en tanto se aleja del “trabajo”: hacer “changas”, que los/as hijos/as mayores (pre- adolescentes en este caso) vayan a pedir dinero en la calle pero fuera de la mirada de los/as vecinos/as, acercarse al Comedor a pedir alimentos a la “vista del barrio”. Y, como señala Blanca, estando en este último estadio tuvo la suerte de llegar un día de marcha. Al participar en la movilización su desesperación adquirió otras connotaciones y se fue quedando. Las actividades que desarrollaba en ese espacio eran homologables al trabajo para ella, aunque dejaba en claro que –en tanto persona vinculada a la organización- luchaba por “trabajo genuino” para que “sus hijos/as no tuvieran que atravesar situaciones de desesperación similares”.

En tercer lugar pone de manifiesto un modo bastante difundido de organizar la cotidianeidad entre las personas vinculadas a organizaciones territoriales del conurbano bonaerense. En una suerte de división sexual del trabajo los varones realizaban “changas” y las mujeres se dedicaban a actividades comunitarias. La mayor parte de estas mujeres o bien no habían trabajado antes fuera de sus hogares o bien habían dejado de hacerlo al nacer sus hijos/as. En este sentido su principal actividad, en tanto organizadora de su cotidianeidad era la atención y cuidado de su familia. Entonces, su primer acercamiento solía estar relacionado con procurarse alimentos que ya no podían comprar. Esto explica, en parte, porque las organizaciones piqueteras estuvieron compuestas mayoritariamente por mujeres (Cross y Freytes Frey, 2007). Una vez vinculados/as a las organizaciones piqueteras a través del plan, se espera que los/as nuevos/as “compañeros/as” siguieran sosteniendo la “lucha” para lograr aumentar la cantidad de recursos disponibles y vincular a otros/as, como puede verse en este fragmentos:

Una cuestión fundamental es que los compañeros entiendan que acá todo se consigue con la lucha, porque no teníamos absolutamente nada y todo lo fuimos consiguiendo con lucha. Acá para conseguir el plan, hay que marchar. Cuando te salió el plan tenés que hacer la contraprestación, ayudar a mantener todo limpio, sabés que tenés que salir a manguear a los negocios si hace falta para el comedor. Y tenés que seguir marchando para que

seamos cada vez más. Eso es importante que los compañeros lo entiendan desde el primer día, acá todo se consigue en la calle, nadie te regala nada. (Camila, dirigente Comedor Los Pibes, 2004)

La enumeración que efectuaba Camila resulta sumamente interesante. Ella situó en un mismo plano, en tanto “lucha”, actividades como “marchar”, “manguear”, “limpiar”, “hacer la contraprestación”. Como puede verse, movilización y gestión local eran dimensiones de un mismo proceso que pueden ser diferenciadas sólo en el análisis, pero que se presentaban articuladas en la vida cotidiana de las personas vinculadas a estas organizaciones. De hecho, la primera práctica de vinculación relevada es la de comprometer a las personas en las actividades cotidianas, sobre todo en lo referido a la gestión de recursos. Así, al involucrar a los/as participantes en estas actividades –en la movilización, pero también en el “manguero” a los comercios de la zona y en las actividades de mantenimiento de los espacios comunes- se reforzaba esta idea de que lo que se conseguía era producto de la “lucha de todos”. La construcción de este sentido se efectuaba a partir de señalar en forma permanente las obligaciones de las personas vinculadas con la organización. De este modo se constituyó un campo regulado por obligaciones mutuas, entre organizaciones, destinatarios/as de los programas y Estado, en el que los conflictos y las tensiones fueron constitutivos. Este campo fue puesto en cuestión a partir del “giro productivista” de la política social, conmocionando este entramado de relaciones sociales, como veremos en lo que sigue.

3. El repliegue local: los desafíos del “giro productivista” (2003-2007)

Luego de las elecciones presidenciales de 2003 el gobierno introdujo varias modificaciones en relación con el tratamiento de la “cuestión piquetera”. Éstas fueron agrupadas bajo el slogan que rezaba que “este gobierno no da ni palos, ni planes” el cual nos fue mencionado por varios/as funcionarios/as del MTESS y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS). Dicho slogan adquiere todo su significado al considerar el contexto en que fue acuñado, sobre todo en relación con dos aspectos.

Por un lado, la puesta en evidencia de la ineficacia política de “dar palos”, es decir de la represión como forma de regulación del conflicto. En relación con este punto se destacó lo ocurrido a partir de la Masacre de Avellaneda que precipitó el fin de la gestión Duhalde.¹⁹

¹⁹ Ésta tuvo lugar el 26 de junio de 2002, en el marco de una acción de protesta organizada por la Coordinadora Aníbal Verón. En este marco se produjo una brutal represión que concluyó con la persecución y muerte de dos personas y varios heridos de bala entre los/as manifestantes.

Habiéndose revelado la ineficacia de “dar palos” para disuadir la movilización “piquetera”, frente se avanzó en diversos intentos de “judicialización y criminalización de la protesta” (Cels, 2003b; Svampa y Pandolfi, 2004).

Por otro lado, a lo largo del tiempo, las organizaciones territoriales y las federaciones “piqueteras” habían logrado desarrollar notablemente la capacidad de utilizar los “planes” como “herramienta” de vinculación de compañeros/as. En este sentido, todas ellas habían experimentado un fuerte desarrollo a lo largo de 2002 a pesar de que, como vimos, la política social había estado pensada, justamente, para evitar su “intermediación”. Entonces, “dar planes” implicaba seguir fortaleciéndolas, a lo cual este gobierno no estaba dispuesto. Bajo una lógica similar se redujo sustantivamente el volumen de alimentos entregados a comedores comunitarios y organizaciones territoriales, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria²⁰.

A su vez se dispuso que el primer objetivo sería evitar “la eternización de los planes”. Para ello, se instrumentaron medidas tendientes a “discontinuar” el JyJHD, la primera de las cuales fue el “congelamiento” de la nómina de “beneficiarios/as”, es decir se prohibió registrar “altas”. El “congelamiento” redundó de hecho en una reducción de la cantidad de “beneficiarios/as” a nivel global. En mayo de 2003 el programa Jefes y Jefas de Hogar tenía 1.975.000 beneficiarios/as; cinco años después la nómina había sido reducida a 1.020.000 (Fuente: MDS)

La segunda medida implementada fue clasificar a la población “beneficiaria” del JyJHD en virtud de su “empleabilidad” y “voluntad de trabajar”. Según consta en el art. 4º del Decreto PEN N° 1506/04 aquellos/as considerados/as como “empleables” recibirían capacitación para el trabajo y un subsidio fijo durante un máximo de dos años, en el marco de los cuales se esperaba su inserción en el empleo formal a través del mercado de trabajo.

Fueron considerados como tales personas que acreditaban experiencia previa en el trabajo, preferentemente varones, que manifestaran su inmediata disponibilidad para comenzar en un empleo. En el marco de la misma estrategia de reconfiguración, el resto de los/as beneficiarios/as fueron “transferidos/as” a la órbita de injerencia del MDS²¹. En este marco irían siendo “incorporados/as” como “población vulnerable” a otros programas sociales diseñados *ad hoc*, según lo establecido en el mismo decreto. Uno de las políticas “destinadas a “atender” a estos

²⁰ Este programa, implementado en 2003 mediante la ley 25.724, establece a las “familias” como destinatarias de los recursos e incorpora funciones de incentivo a la autoproducción de alimentos, la “educación alimentaria y nutricional” respetando “particularidades regionales” y formación en gestión descentralizada y prevención de enfermedades (Fuente: MDS)

²¹ En este sentido es necesario recordar que el Plan Jefes y Jefas de Hogar era administrado por el MTESS.

“grupos vulnerables” fue el “Programa Familias por la Inclusión Social”, o “Plan Familias”, según el Decreto PEN 825/05.

Este programa, dirigido principalmente a las mujeres jefas de hogar²², asignaba un subsidio variable en función de la cantidad de hijos/as menores de 19 años a cargo de la persona beneficiaria, no exigiendo “contraprestación laboral” como el JyJHD, sino la acreditación de que los/as menores acudían a la escuela y estaban cumpliendo con el plan de vacunación.

El criterio de *empleabilidad* está relacionado con el concepto de “productividad marginal” de Marshall, central para la economía neoclásica. Desde este enfoque existe una población “inempleable” en tanto su productividad es demasiado baja para ser incorporada en la economía formal, considerada como “incapaz de pagar su salario con el trabajo que realizan”. Desde este enfoque, dicha población está destinada –en el mejor de los casos- a recibir formación que les permita incrementar su capital humano o –en el peor- a recibir asistencia de por vida (Gautié, 2002)

Los cambios en la política social incluyeron asimismo la puesta en marcha de emprendimientos productivos, entre los cuales se destacó el “Manos a la Obra”. En este marco, el estado se posicionó como un agente generador de empleos, pero no en forma directa sino a través de funciones de “promoción” (Fuente: MDS²³). Éste preveía brindar “apoyo económico y financiero” a “emprendimientos productivos, a cadenas productivas, a servicios a la producción y a los Fondos Solidarios para el Desarrollo”. Además de este “apoyo”, proponía dar “asistencia técnica y capacitación” a los/as emprendedores/as. Sus destinatarios/as eran “prioritariamente” las “personas, familias y grupos en situación de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social” bajo la condición de que conformaran “experiencias productivas y/o comunitarias²⁴”.

Este tipo de programas se insertó en el esquema de las “recomendaciones” efectuadas en los documentos de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), que controlaron la adjudicación de fondos indispensables para sostener los programas de la “emergencia” (SIEMPRO). Dichos organismos

²² Por otra parte también se puede observar en documentos del MDS que este programa está ante todo pensado para las mujeres. Por ejemplo, en el documento antes mencionado se señala que el Plan está “*especialmente*” dirigido a “*madres jefas de hogar*” (pág. 2). Luego en la página web del Ministerio se aclara que “*en el caso de que no haya mujer en el hogar, el hombre podrá optar por el traspaso y ser titular del beneficio*” (“Programas familias por la inclusión social”). Disponible en http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/PF/ventajas_op.asp.

²³ “La construcción pública del desarrollo local: La experiencia del Plan Nacional Manos a la Obra, 2006”

²⁴ A pesar de que el texto de la norma habla de experiencias comunitarias, esto no debe entenderse en el sentido de que podía utilizarse para lo que nuestros/as entrevistados/as entendían por tales. De hecho, los subsidios estaban pensados para compra de maquinarias e insumos y no podían utilizarse ni para pagar a los/as trabajadores/as ni para comprar alimentos. Al respecto ver el documento “La construcción pública del desarrollo Local: La experiencia del Plan Nacional Manos a la Obra, 2006” del MDS.

habían criticado en varias oportunidades. Los/as representantes de estos organismos consideraban que la “política social” debía dirigirse a generar “autonomía” y no “dependencia del estado” a partir de la generación de “capital social” (Álvarez, 2000) y de impulsar el “empoderamiento de los pobres” (World Bank, 2002).

Pero, a su vez, estas medidas fueron presentadas como respuesta a las demandas de “trabajo genuino”. La posición adoptada por el gobierno en este marco puede observarse en las declaraciones del Secretario de Empleo del MTESS que reproducimos a continuación:

Todas las organizaciones reivindican el trabajo genuino –dice Deibe–. Pero cuando discutimos con ellos la posibilidad de armar emprendimientos o cooperativas de viviendas, nos responden con insatisfacción ante este tipo de propuestas. Por eso nosotros marcamos que este gobierno está orientado a la generación de empleo y no a la eternización de los planes. (Enrique Deibe, Página/ 12, 22/07/2004, reportaje de Laura Vales “El Gobierno no quiere la eternización de los planes”)

Las declaraciones de Deibe nos permiten identificar el eje a partir del cual el gobierno planteó el debate respecto al “giro productivista”. Este funcionario señalaba que las “organizaciones” reclamaban “trabajo genuino” y que el gobierno *respondía* a este reclamo con programas que apuntaban a generarlo a través de la puesta en marcha de “emprendimientos” y/o “cooperativas de vivienda”. No obstante, los/as líderes de estas organizaciones se mostraban “insatisfechos/as” frente a esta respuesta, lo cual lo llevaba a interpretar que lo que buscaban eran “planes”, que era aquello que el gobierno no estaba dispuesto a financiar.

Entre los/as dirigentes que habían protagonizado la “lucha por el trabajo genuino”, los cambios en la política social dieron lugar a diversas interpretaciones y varias dudas. Para la mayoría de los/as dirigentes nacionales de la FTV los cambios en la política social constituían una posibilidad de mejorar las oportunidades de los/as “compañeros/as” de acceder a un “trabajo genuino”, en tanto recuperaban las propuestas efectuadas al gobierno anterior a cargo de Eduardo Duhalde. No obstante, esta perspectiva no era compartida por otros/as líderes “piqueteros/as”. Por empezar, los/as dirigentes del Sector Desocupados de la CCC se mostraron públicamente en contra de esta interpretación como puede verse en lo que sigue:

Nos parece que el dinero que están poniendo en emprendimientos, que es mucho dinero, debería volcarse a reactivar el mercado interno. Hay emprendimientos que pueden funcionar, pero pongamos un ejemplo: los que montan un taller de 20 personas para fabricar pañales no pueden competir con los precios de las grandes empresas [...] Pensamos que con la profundidad que tiene la crisis, la apuesta por la economía social, por los emprendimientos, sólo puede funcionar en un país que esté en producción. [...] Nosotros en La Matanza estamos haciendo el tendido de agua potable. Ahí están trabajando 60 cooperativas desde hace tres meses. Fue un

proyecto que propusimos nosotros y es mejor que no tener trabajo. Pero tenemos que decir que no es la solución de fondo, porque nos convierte en mano de obra barata. [...] La cooperativa donde más ganan los sueldos son de 500 pesos. Y hay que zanjear y hay que hacer una obra que vale un montón de plata con muy pocos fondos. (Juan Carlos Alderete, Página/ 12, 22/07/2004, reportaje de Laura Vales “Nos convierten en mano de obra barata”).

La perspectiva de Alderete, quién también había participado junto con D’Elia de la reunión con Duhalde a la que hicimos referencia, era que el apoyo a los emprendimientos productivos debería hacerse no sólo mediante subsidios sino a partir de estimular la demanda. Para eso, él proponía “volcar” esos fondos en el “mercado interno”. Desde su punto de vista, la “economía social” podía aportar a la creación de empleo pero no al margen del mercado, sino integrada en él. Por ello, aseguraba que ésta “sólo” podía “funcionar” en un “país que esté en producción”, lo cual a su entender no era el caso de la Argentina. Y la activación de la producción dependía del incremento de la demanda agregada local. En este sentido, su referencia era el modelo de industrialización sustitutiva configurada conforme al “modelo de los dos sectores”, en el que la producción industrial se destina al consumo interno y se constituye en una fuente directa e indirecta de empleo.

Este dirigente consideraba que, si bien era “mejor que no tener trabajo”, el modelo de economía social implementado no resultaba “competitivo” y por lo tanto no podía garantizar una fuente de empleo estable. Asimismo, los ingresos obtenidos estaban muy por debajo de los de mercado y en este sentido, los/as “emprendedores/as” se “convertían” en “mano de obra barata”. En sus declaraciones se rescataba el hecho de que trabajar en las cooperativas de saneamiento era “mejor que no tener trabajo”. Sin embargo, ni su estabilidad ni el nivel de ingresos ofrecidos constituían, desde su perspectiva una alternativa a las “changas”. Esta perspectiva era compartida por las organizaciones vinculadas al Bloque Piquetero Nacional (BPN), la mayor parte de las cuales estaban vinculadas a partidos trostkistas, cuyos líderes sostenían que el rechazo a los cambios en la política social era “total”.

Más allá de estas controversias, como hemos visto el propósito declarado de estos programas era crear puestos de “trabajo genuino”, para la población definida como “vulnerable”, es decir quienes carecían de las “herramientas” para insertarse por sus propios medios en el “mercado de trabajo”. En lo que sigue analizaremos con datos de la EPH el impacto que tuvieron tales medidas en la distribución del ingreso y en el empleo hasta 2007.

4. Pobreza y desempleo luego de la crisis social de 2001

En el primer apartado habíamos observado que los indicadores que miden la situación del mercado de trabajo daban cuenta de un proceso de precarización de las condiciones de vida de los sectores de menores ingresos, que había avanzado inexorablemente desde mediados de los '90. A continuación analizaremos lo ocurrido a partir de la crisis social de 2001 hasta 2007. Para empezar, observaremos las tasas de actividad, empleo, desocupación, subocupación demandantes y no demandante dispuestas en el cuadro 4.

Cuadro 4: Tasa de actividad, empleo, desocupación y subocupación en la zona metropolitana de Buenos Aires en el período 1996-2006 ²⁵

	Actividad	Empleo	Desempleo	Subocupación Demandante	Subocupación No Demandante
1986	40,0	38,2	4,5		
2003	47,5	40,1	15,6	11,8	5,6
2004	48,3	42,0	13,0	10,1	5,7
2005	48,3	42,9	11,9	8,7	4,3
2006	48,3	43,6	9,8	8,3	3,9
2007	47,5	43,8	7,7	6,1	3,8

Mantuvimos el año 1986 como punto de referencia a fin de no perder de vista los registros de estos indicadores en los momentos previos a la implementación del “modelo”.

Observando la tasa de actividad vemos que en un período de más de veinte años ésta se ha incrementado en forma permanente hasta registrar un alza de alrededor del 20% en las últimas mediciones, correspondiente a 7,5 puntos porcentuales. En cambio, el empleo se incrementó en alrededor de 5,5 puntos. Considerando esta situación se podría explicar el desempleo vigente como resultado casi directo del incremento de la tasa de actividad.

Respecto al incremento de la tasa de desocupación observado en el período se puede observar que luego de permanecer en los dos dígitos por más de una década –recordemos que había alcanzado esa condición en 1994- comenzó a retraerse a partir de 2003, siendo la última medición considerada de 7,7%. Si bien ésta representa un incremento de más del 60% respecto a la medición de 1986, a la vez, expresa una disminución de casi la misma magnitud respecto a los valores de esta tasa en 2002.

Considerando la tasa de subocupación demandante se observa que la tendencia alcista que tuvo desde 1994 comenzó a revertirse a partir de 2003 cayendo una media de 2 puntos porcentuales

²⁵ Es necesario advertir que en 2003 el INDEC cambió la estrategia de medición de la EPH, dando lugar a una medición “continua” de la que se obtienen resultados cuatrimestrales. Dado que habíamos considerado los datos de octubre en la medición “puntual”, tomamos como referencia el cuarto trimestre en la “continua”.

anuales. En tanto, la tasa de subocupación no demandante, luego de años de relativa estabilidad – hecha la excepción de 2002- comenzó a caer a partir de 2005.

Evidentemente la crisis de 2001 mostró efectos perdurables en los indicadores que miden el comportamiento de la PEA en tanto la tasa de actividad mantuvo su tendencia a incrementarse en forma permanente, a pesar de la recuperación del empleo y la disminución del desempleo.

Considerando el efecto de trabajador/a adicional observado durante la vigencia de la convertibilidad es posible asegurar que quienes se lanzaron a la búsqueda de empleo para complementar sus ingresos familiares no retornaron a la inactividad. Sólo en el último año se observa una disminución de este indicador a niveles, que sin embargo, no alcanzan a retrotraer la situación ni siquiera a la registrada durante la vigencia de la crisis de 2001.

Del mismo modo, la relativa paridad entre las tasas de subempleo demandante y desempleo nos da una pauta respecto a la vigencia del empleo informal como forma de financiar la búsqueda de ocupaciones de tiempo completo. No obstante, es necesario considerar otros elementos para poder observar si esta hipótesis es acertada o si, en cambio, estamos en presencia de otro tipo de proceso. Por eso, como hemos hecho anteriormente, analizaremos el comportamiento de la distribución del ingreso en el cuadro 5.

Cuadro 5: Ingreso del diez por ciento más rico de la población versus ingreso del diez por ciento más pobre de la población, en el período 2001-2007.

Año	Porcentaje del ingreso del primer decil de población	Porcentaje del ingreso del último decil de población	Relacion último decil sobre primer decil
1986	2,5	34,6	13,8
2001	1,3	37,3	28,7
2002	1,5	36,4	24,3
2003	1,3	36,4	28,0
2004	1,3	36,5	28,1
2005	1,3	34,7	26,7
2006	1,2	34,4	28,7
2007	1,2	34,4	28,7

Tomando como referencia el año 1986, se puede observar que al final del período considerado el porcentaje del ingreso en manos del primer decil se había reducido a menos de la mitad. Del mismo modo, en el período 1997 – 2007 sufrió una constante disminución, la cual se alteró transitoriamente en 2002 –en un contexto de plena expansión del presupuesto destinado a atender la “emergencia”- para volver, al año siguiente, a los niveles de 2001. A su vez, es posible

observar que entre 2003 y 2007 estos sectores vieron disminuida su participación en el ingreso en forma constante.

Por su parte, los sectores con mayores ingresos experimentaron una mejora en su posición relativa en los momentos previos a la crisis de 2001 –recordemos que la medición corresponde al mes de octubre-, la cual se redujo a lo largo del año 2002. En ese marco, se registró una de las brechas menos pronunciadas entre este sector y el más pobre dentro del período analizado. Esto coincide con la fuerte transferencia de recursos llevada a cabo desde el estado nacional a la política social, en el marco de la “emergencia”. Esta hipótesis se refuerza si consideramos que los cambios anunciados en la política social comenzaron a hacerse efectivos en forma significativa sólo en 2005, momento en los sectores más pobres comenzaron a ver disminuida su participación en el ingreso.

Tomando nuevamente como referencia el año 1986 la brecha entre el primer y último decil más que se duplicó, manteniéndose por encima del 25%. A pesar de que a partir de 2004 se verificó un pronunciado descenso en la tasa de desempleo abierto y subempleo demandante, estos cambios no tuvieron impacto en la distribución del ingreso. Esto puede significar que la población incluida en el primer decil siguió subsistiendo en base a los recursos adjudicados por la política social y/o empleándose bajo la modalidad de las “changas”. En consideración de estos aspectos no resulta sorpresivo que la tasa de actividad haya continuado en aumento conforme a la vigencia de los factores que dieron lugar al “efecto de trabajador adicional” antes referenciados.

Al mismo tiempo, es posible observar que la participación en el ingreso del sector más pobre no puede ser explicada exclusivamente en relación con la concentración de la riqueza en el primer decil, dado que si bien este sector no sufrió grandes detrimentos tampoco experimentó alzas significativas. Proponemos entonces analizar lo ocurrido con los sectores medios de la población, trabajo que llevaremos a cabo a partir de la información volcada en el Cuadro 6.

Cuadro 6: Ingreso del diez por ciento más rico de la población versus ingreso del diez por ciento que se ubica en el centro de la escala versus el diez por ciento más pobre de la población, en el período 2003-2007.

Año	Porcentaje del ingreso del primer decil de población	Porcentaje del ingreso del último decil de población	Relacion último decil sobre primer decil	Porcentaje del ingreso del quinto decil de población	Relacion quinto decil sobre primer decil	Relacion último decil sobre quinto decil
2003	1,3	36,4	28,0	6,1	4,7	7,8
2004	1,3	36,5	28,1	6,1	4,7	7,8
2005	1,3	34,7	26,7	6,3	4,8	7,2
2006	1,2	34,4	28,7	6,3	5,3	6,6
2007	1,2	34,4	28,7	6,4	5,3	6,5

Este cuadro nos permite observar que el quinto decil de población incrementó su participación en el ingreso a lo largo del período 2003-2007, tanto en detrimento de los sectores más ricos como de los sectores más empobrecidos, aunque menos en relación con los primeros (5%) que respecto a los segundos (15%).

Frente a esta situación una hipótesis posible es la de que durante estos años los sectores con mayores calificaciones, lograron insertarse en el empleo formal y vieron mejoradas sus condiciones de vida. En cambio, aquellos que por su escasa experiencia laboral previa, sus limitadas calificaciones y competencias laborales o por la imposibilidad de delegar sus responsabilidades domésticas no pudieron acceder a los puestos de trabajo creados, siguieron padeciendo el deterioro de sus condiciones de vida sin que se haya alterado la tendencia establecida en la década del '90. Esta población constituiría “el núcleo duro” del desempleo y las estrategias diseñadas para su incorporación se habrían mostrado inadecuadas o cuanto menos insuficientes.

Asimismo, hemos observado que la discontinuidad de programas como el JyJHD y aquellos que distribuían alimentos, cuya expansión permitió efectivamente incrementar la participación de los sectores más empobrecidos en la distribución del ingreso, han tenido un fuerte impacto en este sentido.

El análisis realizado a lo largo de estas páginas nos permitió observar un desplazamiento en la definición de la cuestión social que partiendo del desempleo como problema social asociada a la condición de *trabajador/a desocupado/a* dio lugar a una discriminación de la población desempleada, bajo la atribución de la condición de “empleabilidad”, para distinguir entre quienes tendrían la capacidad de insertarse en el mercado de trabajo y quienes deberían ser objeto de asistencia. Esta distinción no sólo se ha expresado en términos discursivos sino también

normativos al establecer a la primera población como ámbito de intervención del MTESS y el “traspaso” de la segunda a la órbita del MDS.

En este sentido, el estudio de la distribución del ingreso nos permitió dar cuenta de que la fractura intra clase que establece el concepto de *inempleabilidad* ha dejado a cierta parte de la población sumida en condiciones de miseria peores a las de la crisis de 2002. En este sentido, los cambios en la política social ha (re)creado la vulnerabilidad de estos sectores, a la vez que ha debilitado las instancias colectivas que permitieron su organización y movilización en el período 1997 -2001”.

5. Reflexiones acerca del tránsito desde el desempleo como cuestión social a la estigmatización del/la desocupado/a

El análisis efectuado nos permitió observar que entre 1991 y 2007 tuvo lugar un proceso de precarización del empleo y aumento del desempleo en el conurbano bonaerense. Como hemos visto, este proceso fue ampliamente resistido por distintos sectores muy alejados de la “apatía política”. Particularmente en la zona metropolitana de Buenos Aires muchas organizaciones territoriales, sindicales y políticas comenzaron a movilizarse desde mediados de los '90 para demandar un cambio en la política económica y la asistencia a los hogares más pobres. En este punto, el “ejemplo de Cutral Có y Mosconi” se constituyó en una invitación a la movilización. En este proceso, la condición de “trabajador/a” dejó de expresar una posición en el mercado de trabajo para constituirse como “identidad esencializada” (Manzano, 2006) y la pobreza pasó a estar íntimamente asociada a la falta de empleo “genuino” aún para quienes jamás habían trabajado en relación de dependencia.

Así, si en un primer momento la cuestión de la pobreza –como privación de “cuestiones esenciales” como la vivienda o el alimento- fue puesta de relieve, hacia fines de la década notamos un desplazamiento a favor de la demanda por “trabajo genuino”. Este asociación entre pobreza y desempleo, que se ha expresado en la formulación de programas sociales (Fernández Álvarez y Manzano, 2007) da cuenta de los diversos procesos políticos que permitieron la “nacionalización del conflicto” en torno al “trabajo genuino” (Cross, 2004).

Asimismo vimos que a lo largo de la década del 90 la tasa de subocupación demandante y desocupación tendieron a equipararse –por primera vez desde que se realizan estas mediciones. De este modo es posible pensar que la alternancia entre desempleo y “changas”, trabajos a plazo y con escasa remuneración constituyó una situación ampliamente extendida. Si aceptamos esta

hipótesis, la consigna de “trabajo genuino” adquiere parte de su significado. Asimismo, al analizar las formas que asumió la “contraprestación laboral” exigida por los programas sociales insertos en la lógica del *workfare* (Barbier y Gautié, 2000) es posible comprender otra de sus implicancias.

Como también hemos observado, a lo largo del período analizado la participación en la distribución del ingreso del último decil de la población se vio ampliamente deteriorada, a pesar de su leve recuperación en 2002, en el marco de la “emergencia”. Este año la brecha entre los sectores de menores ingresos –destinatarios de las medidas de “emergencia” que administraron en parte las organizaciones piqueteras- y los de mayores ingresos fue la más pequeña en el período analizado. No obstante, el gobierno kirchnerista discontinuó las que medidas que favorecieron este acortamiento, aún antes de tener la posibilidad de evaluar la eficacia del “giro productivista” de la política social implementado. Éste, por otra parte, demostró ser sumamente ineficaz en términos de los objetivos propuestos, considerando sus resultados.

En cambio, al introducir la cuestión de la *empleabilidad*, tuvo lugar una redefinición que situó nuevamente la falta de empleo como carencia personal y a –ciertos/as- desocupados/as como objeto de “asistencia”. De este modo la población sin empleo es diferenciada por atributos personales: condición de género, cantidad de hijos/as, experiencias laborales previas, calificaciones, voluntad de trabajar, etc, atribuyéndoles o negándoles la condición de empleable. Consideramos que esta situación es similar en este aspecto a lo que observa Gautié (2002) en el caso francés al ver que quienes poseen el atributo de la empleabilidad, considerados potenciales “trabajadores/as”, resultan dignos/as de estima social y apoyo estatal. En tanto, el/la desocupado/a “inempleable”, cuyos comportamientos y trayectorias –pensados individualmente- explican sus dificultades de inserción, es un ser socialmente vulnerable, y por lo tanto dependiente de la asistencia estatal. El “traspaso” de la gestión de los programas desde el MTEES al MDS aporta en el mismo sentido.

De este modo al analizar los cambios en las formas que adquirió la cuestión social del desempleo desde 2001 observamos que ha tenido lugar una deconstrucción del desempleo como categoría social para dar paso a una individualización de los desocupados/as, favoreciendo una “medicalización” de las intervenciones (Gazier, 1990). De este modo el estado se convierte en instancia de gestión y control de comportamientos (Rosanvallon; 1995) antes que como agente de la redistribución de la riqueza socialmente generada. Este análisis, a su vez, nos advierte que la vulnerabilidad de ciertos sectores no es intrínseca a sus condiciones sino producto del estado de las relaciones de fuerza en dicho campo. En este sentido, consideramos que la economía

social o solidaria, en tanto categoría de la práctica, es el sustrato de la actual disputa en torno a la integración socio económica de los sectores populares.

Bibliografía citada

- Abal Medina, Juan y Nejankis, Facundo (2002): “Capacidades estatales: La construcción de capacidad administrativa y los cambios en el régimen de empleo público” en *Revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político*, Vol 1, Nº 1, pp 113 – 138
- Álvarez, Sonia (2000) “Políticas de desarrollo social, transformaciones y paradojas”, en Hintze, Susana (comp.) *Estado y sociedad. Las políticas sociales en los umbrales del siglo XXI*, Buenos Aires: Eudeba
- Andújar, Andrea (2005): “‘De la Ruta no nos vamos’: Las mujeres piqueteras (1996-2001), X Jornadas Interescuelas - Departamentos de Historia, Rosario. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos31/mujeres-piqueteras-no-abandonan-rutas/mujeres-piqueteras-no-abandonan-rutas.pdf>
- Aspiazu, Daniel. (2002). “Privatizaciones en la Argentina: La captura institucional del Estado”, *Realidad Económica* Nº 189, pp. 8-16.
- Auyero, Javier (2002): *La Protesta. Retratos de la beligerancia popular en la argentina democrática*, Buenos Aires: Libros del Rojas
- Barbier, Jean – Claude y Gautier, Jérôme (2000): “Activation Policies, Workfare and "Insertion", The Welfare State in the Age of Globalization, Lessons from the USA, France and the UK” en French-South African workshop: The Impact of Globalisation on the World of Work, Pretoria, Noviembre, 2000 (versión preliminar)
- Battistini, Osvaldo y Dinerstein, Ana (1995): "Desocupados, precarizados y estables: alienación y subjetividad del trabajo", *Realidad Económica*, 134, pp 62-71
- Beccaria, Luis (2002): “Empleo, remuneraciones y diferenciación social en el último cuarto del Siglo XX” en VV.AA.: *Sociedad y Sociabilidad en la Argentina de los '90*, Buenos Aires: Biblos
- Castel, Robert (1997): *La metamorfosis de la cuestión social*, Buenos Aires: Paidós
- CELS (2003b): *El estado frente a la protesta social 1996-2002*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), (2003a): “Plan Jefes y Jefas: Derecho Social o Beneficio Sin Derechos, Documentos de Trabajo, Nº4, Buenos Aires
- Cross, Cecilia (2004): “La Federación de Tierra y Vivienda de la CTA: El sindicalismo que busca representar a los desocupados” en Osvaldo Battistini (coord.) *El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en el proceso de construcción identitaria de los trabajadores*, Buenos Aires: Prometeo
- Cross, Cecilia (2006): *Las estructuras de movilización y las oportunidades políticas en el estudio de los movimientos sociales. El caso de una organización piquetera*. Tesis de Maestría. Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo: Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires
- Cross, Cecilia (2007): “Los procesos de organización colectiva y la construcción de las demandas: Reflexiones a partir del estudio de una organización piquetera en el período 2002-2005” en *Runa*, Nº 27, (en prensa)
- Cross, Cecilia (2008): “Las huellas de las tomas: La articulación de la experiencia en procesos de asentamiento en el conurbano bonaerense” en *Revista Margen*, Nº 51, Año 2008, ISSN 0327-7585. Disponible en: <http://www.margen.org/suscri/margen51/cross.html>
- Cross, Cecilia y Freytes Frey, Ada (2007b): “Movimientos piqueteros: tensiones de género en la definición del liderazgo”, *Argumentos*, Nº 27, pp. 77-94
- Damill, Mario; Frenkel, Roberto y Juvenal, Luciana (2003): “Las cuentas públicas y la crisis de la convertibilidad en la Argentina”, *Desarrollo Económico*, Vol. 43, No. 170, pp. 203-230

- Diana Menéndez, Nicolás (2007): “La representación sindical en el Estado: los casos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)”, Tesis de Maestría, Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires
- Farinetti, Marina (1999): “¿Qué queda del movimiento obrero?” *Revista Trabajo y Sociedad*, N° 1, Vol 1, Santiago del Estero
- Fernández Álvarez, María Inés y Manzano, Virginia (2007): “Desempleo, acción estatal y movilización social en Argentina” en *Revista Política y Cultura* N° 27, México pp. 143-166
- Galín, Pedro y Novick, Marta (1990): *La precarización del empleo en la Argentina*, Buenos Aires: CEAL
- Gautié, Jérôme: “De la invention du chômage à sa deconstruction”, *Geneses*, N° 46, pp 60-76.
- Glaser, Barney y Strauss, Anselm (1967): *The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research*, New York: Aldine Publishing Company.
- Manzano, Virginia (2003): “Piqueteros y Beneficiarios: Modalidades de acción sociopolítica y proceso de construcción identitaria” en CD del VI Congreso Nacional de Especialistas en Estudios del Trabajo, ASET, agosto, Buenos Aires
- Manzano, Virginia (2005): “Desempleo, “piquetes” y acción estatal en Argentina: Análisis antropológico de la configuración de un campo de relaciones sociales y políticas” en CD de la VI Reunión de Antropología del MERCOSUR, 16-18 de octubre, Montevideo.
- Manzano, Virginia (2006): “Modalidades de acción socio política y procesos de construcción identitaria. Etnografía de las organizaciones piqueteras del Gran Buenos Aires” en Wilde, Guillermo y Schamber, Pablo (comp.): *Culturas, comunidades y procesos urbanos contemporáneos*. Vol 3. Buenos Aires: SB.
- Martuccelli, Danilo y Svampa, Maristella (1997): *La Plaza Vacía. Las transformaciones del peronismo*, Buenos Aires: Losada.
- Neffa, Julio (2003): *El trabajo humano: Contribuciones al estudio de un valor que permanece*, Buenos Aires - México: CEIL-PIETTE CONICET Asociación Trabajo y Sociedad
- Neffa, Julio César y Matheu, Pedro (1984): *La organización del trabajo en la Argentina*, Buenos Aires: Ceil-Conicet
- Novaro, Marcos (1995): “Crisis de representación, neopopulismo y consolidación democrática” en *Revista Sociedad* N°6, Buenos Aires
- Peña, Milcíades (1986): *Industrialización y clases sociales en Argentina*, Bs. As: Hyspamerica
- Rapoport, Mario (2000): “El Plan de Convertibilidad y la economía argentina (1991-1999)” en *Revista Economía e Sociedade*, Vol 15, pp 15-47
- Roig, Alexandre (2007): “La monnaie impossible : la convertibilité argentine de 1991”, *Tesis de doctorado*, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
- Rosanvallon, Pierre (1995): *La nouvelle question sociale*, Paris: Senil
- Schuster Federico y Pereyra Sebastián (2001): “La protesta social en la Argentina democrática” en Norma Giarraca y Karina Bidaseca (comp.): *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires: Alianza Editorial.
- Schvarzer, Jorge (1996): *La industria que supimos conseguir*, Bs. As: Planeta
- Segalen, Martine (1986) *Historical Anthropology of the Family*, Cambridge: Cambridge University Press
- Svampa, Maristella (2000): De la “patria metalúrgica al Heavy metal” en Svampa, Maristella (ed) Desde abajo: La transformación de las identidades sociales, Buenos Aires: Biblos
- Svampa, Maristella (2005): *La Sociedad Excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*, Buenos Aires: Taurus
- Svampa, Maristella y Pandolfi, Claudio (2004): “Las vías de la criminalización de la protesta en Argentina 1” OSAL, N°14

- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003): *Entre la Ruta y el Barrio: La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires: Biblos
- Thompson, Edward Palmer (1984): *Tradición, revuelta y conciencia de clases*. Madrid: Crítica.
- Thwaites Rey, Mabel (2001): *Alas rotas: La política de privatización y quiebra de Aerolíneas Argentinas*, Buenos Aires: Temas Grupo.
- Vilas, Carlos (1997): “De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo”, *Desarrollo Económico*, N° 144, Vol 36, pp 931-952
- Vitullo, Gabriel (2002): “Participación electoral, comportamiento político y desestructuración social en Argentina y Brasil” en Levy Bettina (comp.): Crisis y conflictos en el capitalismo latinoamericano: Lecturas políticas, Buenos Aires: Colección Becas de Investigación, CLACSO.
- World Bank (2002): “Memoria Preliminar” II Foro Temático Regional “Gobernabilidad para el Empoderamiento de los pobres”. Disponible en: www.bancomundial.org/foros/sdadcivil/web/resumen.htm. Fecha de última consulta 1º de noviembre de 2007
- Zibechi, Raúl (2003): *Genealogía de la revuelta. Argentina sociedad en movimiento*, Buenos Aires: Letra Libre, Nordan-Comunidad